

PALABRAS DE ALICIA BÁRCENA, SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, CON OCASIÓN DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÓN ANUAL DE LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

Calgary, Canadá, 28 de marzo de 2011

Quiero agradecer al Banco Interamericano de Desarrollo, así como a su Presidente, Luis Alberto Moreno, y su Vicepresidenta Ejecutiva, Julie Katzman, por la cordial invitación a participar en esta quincuagésima segunda reunión anual de la Asamblea de Gobernadores.

Mi gratitud también a la hermosa ciudad de Calgary, producto de la pujanza cultural y económica de este gran país, y a su gente, por su infinita calidez y hospitalidad.

Tenemos tanto que aprender de esta magnífica nación, una de las pocas economías desarrolladas que mostró gran resiliencia y destacada fortaleza frente a la crisis financiera

por su largo historial de crecimiento, apertura comercial y buenos resultados en el sector financiero.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) han constituido un comité tripartito para brindar apoyo técnico a los países de las Américas. Hemos acompañado a los países de la región por más de seis décadas en los vaivenes de su historia contemporánea. A estas tres instituciones nos convoca la tarea de una constante creación y reinención de las ideas y las políticas públicas para el desarrollo.

La crisis financiera y su impacto social, así como la amenaza del cambio climático, los acontecimientos en Oriente Medio y la devastadora tragedia causada por el desastre natural en el Japón, ponen un gran signo de interrogación sobre el modelo económico y social que ha predominado en las décadas precedentes, incluidos los principios hasta entonces aceptados sin mayor cuestionamiento, como por ejemplo la autorregulación de los mercados y la escasa supervisión de los sistemas

financieros; también se cuestionan los alcances del paradigma productivo, tecnológico y energético que ha dominado en nuestros países.

En estas circunstancias, los ciudadanos y las ciudadanas buscan hoy refugio y guía en sus gobiernos, en sus Estados y en un ordenamiento internacional más justo, más diverso y más inclusivo en su proceso de toma de decisiones.

A nivel mundial se observa un panorama económico que opera a dos velocidades: por una parte, las economías desarrolladas enfrentan desafíos que nuestra región atravesó hace dos décadas, con tasas de crecimiento modestas, déficits internos crecientes y un elevado endeudamiento; por otra parte, y en contraste con ello, se observa la robustez de la reactivación de las economías emergentes, que se han convertido en los motores del crecimiento mundial. Hoy día las economías emergentes son mucho más importantes e influyentes, lo que ya empieza a reflejarse en la gobernanza mundial.

Si algo sabemos, en el contexto de incertidumbre en que vivimos, es que la región de América Latina y el Caribe aprendió de crisis pasadas.

Gracias a las sólidas políticas monetarias y fiscales aplicadas en los años anteriores, la mayoría de los gobiernos de la región pudieron implementar medidas contracíclicas destinadas a moderar el impacto de la crisis en sus economías.

Esta mejor gestión de política macroeconómica, acompañada de una mayor coordinación regional y un conjunto de políticas sociales progresistas, ofreció un mayor espacio para la adopción de políticas orientadas a aminorar los impactos negativos de la crisis y a fortalecer el papel de la política y del Estado en la región.

La combinación de políticas para proteger el empleo ha sido clave para que el impacto de la crisis en la pobreza fuera prácticamente neutro en 2009. Incluso, en algunos países aumentaron los empleos en el sector formal, lo que, unido al incremento de las remuneraciones, tuvo un efecto relativamente mayor en las familias de ingresos más bajos

que en aquellas con más recursos. El papel de las mujeres, además, ha sido ampliamente reconocido en la recuperación económica y la resiliencia social de la región.

La tasa de pobreza disminuyó 11 puntos porcentuales entre 2002 y 2008, del 44% al 33%. En el pasado, las crisis económicas mundiales solían dejar a las economías de la región en situación de extrema fragilidad y se traducían en elevadísimas tasas de pobreza. En esta ocasión, la pobreza, que ya se había reducido durante los años de auge de la economía previos a la crisis, siguió disminuyendo en 2010. Según las últimas estimaciones, la tasa de pobreza de la región sufrió un ligero aumento en 2009 (del 33% al 33,1%) pero se estima que en 2010 disminuyó un punto porcentual y se situó en un 32,1%.

Según las estimaciones de la CEPAL, la región creció un 6,1% en 2010 y se registró un aumento del PIB per cápita del 4,8%, lo que consolidó la recuperación que se había iniciado en la mayoría de las economías de la región en el segundo semestre de 2009. Tras la fuerte expansión de 2010, se prevé un ritmo de crecimiento más moderado, cercano al 4,5%, en 2011.

Es claro que los promedios esconden realidades variadas y diversas. En este sentido, debemos considerar que la región también opera a dos velocidades: por una parte, la de América del Sur, con una actividad robusta y muy ligada a exportaciones de recursos naturales destinadas a Asia y particularmente a China; por la otra, la de México, Centroamérica y el Caribe, muy vinculados al destino de los Estados Unidos.

En cada país hay sectores sociales que aprovechan las oportunidades del crecimiento y la innovación. Quedan pendientes otros grupos que no disponen de las oportunidades para integrarse y que no lo conseguirán sin políticas explícitas que refuercen la sinergia entre convergencia productiva e igualdad, sin un fortalecimiento de la política y los pactos fiscales, sin que encontremos la complementariedad entre globalización, equidad y competitividad, por un lado, con políticas públicas activas para avanzar en la innovación, y la protección social con criterios universales, por el otro.

Por ello, no podemos ser complacientes. Hay problemas coyunturales y estructurales que la región debe afrontar.

Es claro que la relativa robustez de las economías en varios países de la región, en un contexto de elevada liquidez y bajas tasas de retorno en los mercados financieros internacionales, ha provocado un aumento significativo de los flujos de capital y, a su vez, ha ejercido presión en los tipos de cambio.

Un desafío inmediato para los países de América Latina y el Caribe es hacer frente a las cuantiosas entradas de capital y a las crecientes presiones inflacionarias provocadas por la actual tendencia alcista de los precios del petróleo y los alimentos. Este aumento de precios de los productos básicos está intensificando el riesgo de que se produzcan burbujas financieras en algunos países exportadores de este tipo de productos. Esto además ha provocado la reprimarización de la estructura exportadora.

Un reto a mediano plazo al que se enfrenta la región es el de reconstruir las capacidades contracíclicas, al tiempo que se establecen las condiciones necesarias para instaurar un patrón de desarrollo productivo que no se base exclusivamente en la exportación de productos básicos.

Los altos precios de los alimentos tienen no solo repercusiones en los niveles de pobreza, sino también en el medio ambiente, por lo que se vuelve necesario aumentar la producción agrícola para responder a la creciente demanda de alimentos y al constante incremento de sus precios, pero también es imperativo hacerlo de una manera sostenible.

La crisis global y los retos a los que nos enfrentamos exigen nuevas formas de abordar el desarrollo. La economía mundial y el sistema financiero han de ser más equitativos, justos y estables para que los beneficios del progreso puedan llegar a todos, incluidos los más pobres.

En lo estructural debemos afrontar la desigualdad, la brecha entre inversión y ahorro y las brechas fiscales, la creciente heterogeneidad productiva y la vulnerabilidad asimétrica frente al cambio climático.

La CEPAL sostiene la importancia de la acción del Estado, la urgencia de no bajar la guardia en materia social, y la importancia de repensar el desarrollo con una mirada de mediano y largo plazo.

No es fácil pedirles a ustedes, señores Gobernadores, que retomen la noción del mediano plazo cuando están comprometidos en la resolución de los problemas que la urgencia plantea y en velar por la estabilidad macroeconómica en condiciones de gran incertidumbre. Pero es imprescindible contar con una visión estratégica de largo plazo que facilite la construcción de pactos sociales por la vía de las instituciones de la democracia.

Es imprescindible persistir en el desarrollo de mejores esquemas de organización y evaluación de la gestión pública para alcanzar la correspondiente rendición de cuentas y la transparencia. Estoy hablando de la búsqueda de un nuevo equilibrio entre Estado, mercado y ciudadanía.

Desde la CEPAL hemos planteado una estrategia que hemos denominado “la hora de la igualdad: brechas por cerrar y caminos por abrir” y que se basa en siete pilares:

El primero, la aplicación de una política macroeconómica para el desarrollo inclusivo, destinada a reducir la volatilidad, aumentar la productividad y favorecer

la inclusión, aspectos esenciales para fortalecer el equilibrio fiscal a mediano plazo y promover sistemas financieros que refuercen la capacidad para aumentar el ahorro interno y apoyar la inversión.

En nuestra opinión, debe priorizarse la vinculación del sistema financiero con el proceso de inversión productiva interna. El tipo de inversión importa: no es lo mismo invertir en innovación y desarrollo productivo que en actividades especulativas o puramente de extracción de recursos naturales. Esto invita a considerar mecanismos para lograr que el capital extranjero complemente el ahorro y la inversión nacional.

El segundo, la superación de la heterogeneidad estructural y el cierre de brechas de productividad —tanto dentro de los países como en comparación con el resto del mundo— con políticas activas que promuevan la convergencia entre las grandes empresas y las pymes a partir del financiamiento inclusivo, el fomento de la innovación, la difusión del conocimiento y una mayor integración en las cadenas de valor de bienes comercializables.

El tercero, la mejora de la integración internacional a partir del fortalecimiento del comercio intrarregional, los vínculos intraindustriales, las instituciones y los sistemas de regulación y la infraestructura que lo acompaña. Proponemos impulsar el regionalismo abierto y, con ello, avanzar hacia una integración más profunda entre los países de la región.

El cuarto, la corrección de las disparidades territoriales que afectan a la productividad y a las capacidades para el desarrollo institucional y social, y que dificultan los encadenamientos productivos a nivel nacional.

El quinto, la generación de más y mejor empleo para aumentar la igualdad de oportunidades y la inclusión social. El empleo con derechos y con protección social es la llave maestra para superar las desigualdades, corregir las disparidades que existen en el ingreso, el acceso a la seguridad social y la estabilidad laboral, y terminar con la discriminación contra la mujer.

El sexto, el cierre de las brechas sociales mediante el aumento sostenido del gasto social y el fortalecimiento de las instituciones sociales, conforme a una agenda pública centrada no solo en la igualdad de oportunidades, sino también en la igualdad en cuanto a niveles de bienestar.

Las políticas en el ámbito social, educativo y de empleo son elementos fundamentales en la agenda de la igualdad.

El séptimo, el establecimiento de un consenso sobre pactos sociales y fiscales, con un Estado más hábil y capaz de redistribuir, regular y supervisar.

El Estado debe ejercer su obligación de proveer un entorno macroeconómico estimulante para la inversión productiva, la innovación y la generación de empleo. Esto requiere de mayor coordinación entre las políticas monetaria, cambiaria, fiscal y de cuenta de capitales.

Por último, no quiero dejar de abordar dos temas de largo alcance. Uno se refiere a la transición demográfica de nuestra región y el otro al cambio climático. Hemos acompañado a los países de la región en sus censos de

población y vemos que todavía hay países con ventanas demográficas importantes por lo menos hasta 2035. Es hora de aprovecharlas para hacer un énfasis mucho mayor en la educación.

Por otra parte, la CEPAL está profundamente comprometida con las tareas relativas al cambio climático. Hemos realizado, y estamos realizando, numerosos estudios en cooperación con el BID para analizar los costos económicos del cambio climático por sectores y por áreas geográficas. En nuestra reciente edición del *Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe* dimos cuenta de que la región se vio afectada por 98 eventos extremos (desastres naturales) que tuvieron un costo de aproximadamente 50.000 millones de dólares.

Señores Gobernadores, creemos que la igualdad social y el crecimiento económico no son objetivos contrapuestos, por el contrario, debemos convertirlos en bienes públicos complementarios: se requiere crecer para igualar pero, tan importante como esto, se requiere igualar para crecer.

Como he dicho antes, proponemos una nueva forma de abordar el desarrollo. Es necesario dotar al Estado de una mayor capacidad para redistribuir los recursos y promover la igualdad, para poder avanzar de ese modo hacia una estructura fiscal y un sistema de transferencias que preste especial atención a la solidaridad social.

La región de América Latina y el Caribe tiene ahora la oportunidad de actuar con una visión a largo plazo a fin de impulsar las condiciones necesarias para lograr un crecimiento robusto, más equitativo y sostenible. El sistema interamericano, incluida la CEPAL, tiene además la ventaja de contar con el apoyo de socios extrarregionales como Alemania, Bélgica, China, Dinamarca, España, Finlandia, Gran Bretaña, Italia, el Japón, Noruega, los Países Bajos, Portugal, la República de Corea y Suecia.

Para terminar, deseo reiterar el continuo apoyo que la CEPAL ha prestado a los gobiernos de América Latina y el Caribe en sus esfuerzos por responder a estos retos de largo plazo.

La CEPAL, con su profunda alma latinoamericana y caribeña, seguirá apoyando a los gobiernos de la región y a la familia interamericana (la OEA y el BID) en sus iniciativas para establecer las bases para un crecimiento económico más equitativo y ambientalmente sostenible.

Una vez más, muchas gracias por permitirme compartir con ustedes estas reflexiones.